

La privatización de la vida cotidiana.

El cercamiento del siglo XXI.

1. La ficción de lo público.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el agua, la luz, la calle, la escuela y el hospital eran derechos, conquistas sociales y bienes comunes. El Estado, con todos sus defectos, era el garante de que estuvieran al alcance de todos, no solo de quienes pudieran pagarlos. Esa situación, la de lo público como espacio de lo común, ha sido desmantelada durante las últimas décadas. Y lo curioso es que apenas nos hemos dado cuenta.

La privatización no ha llegado con un golpe de Estado, sino con una retirada silenciosa. El Estado no ha desaparecido, ha mutado. Ya no es el administrador de lo común, sino el portero de un mercado donde todo tiene precio y nada tiene valor intrínseco. El agua, la energía, la vivienda, la educación, la sanidad, los datos y hasta el espacio público han pasado de ser derechos a ser servicios de suscripción. Y nosotros, los ciudadanos, nos hemos transformado en clientes cautivos.

Este ensayo no es una crónica del desmantelamiento de lo público (esa historia ya ha sido contada muchas veces) sino una cartografía del nuevo régimen de propiedad, uno que no usa alambradas sino facturas.

2. Sed de rentabilidad.

En 2014, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta para declarar el acceso al agua como un derecho humano fundamental. No fue un descuido, sino una declaración de principios. El agua es demasiado valiosa como para dejarla en manos de los ciudadanos. Si es un derecho, es gratuita, pero si es un recurso, es un negocio. Y el negocio ha ganado.

En España, el ciclo integral del agua se gestiona mediante concesiones que otorgan el control de cuencas enteras a empresas privadas como Aqualia o Agbar.

En Chile, el Código de Aguas de 1981 la privatizó hasta el punto de que hoy es el único país del mundo donde el agua puede ser propiedad privada perpetua. El resultado fue que, durante las sequías, los agricultores del norte de Chile tuvieron que comprar agua a fondos de inversión estadounidenses.

En Cochabamba (Bolivia), la guerra del agua de 2000 fue la primera rebelión exitosa contra la privatización. El gobierno, presionado por el Banco Mundial, había concedido la gestión del agua a una empresa estadounidense (Aguas del Tunari) que disparó las tarifas hasta un 200%. La población salió a la calle, hubo decenas de heridos y un muerto, y finalmente el contrato fue rescindido. Fue un precedente importante, aunque el modelo se ha replicado con otras formas en otros países.

El agua cotiza en bolsa a través de ETFs (cesta de activos que puede incluir acciones, bonos, divisas o materias primas) y futuros. Su precio no responde a la escasez física, sino a la especulación financiera. Ya ocurrió con el dinero, que pasó de ser un instrumento a ser un fin. Ahora sucede con el agua, que de ser una necesidad se ha convertido en un activo. Y el capitalismo ha decidido que la vida debe pagar entrada.

3. El oligopolio de la luz.

La transición energética era uno de los grandes relatos del siglo XXI: íbamos a abandonar los combustibles fósiles, abrazar las renovables, descentralizar la producción y empoderar al "prosumidor" (consumidor a la vez que propietario del sistema de generación de electricidad). Una hermosa historia. Pero la realidad es más sórdida. Las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, no han combatido las renovables, sino que las han capturado. Han convertido el sol y el viento, bienes comunes por excelencia, en fuentes de rentabilidad oligopólica.

El resultado es una paradoja sangrante. España es uno de los países con mayor potencial solar de Europa y la pobreza energética afecta a más del 10% de los hogares, que destinan más del 10% de sus ingresos a mantener la luz encendida.

El mercado mayorista de electricidad, diseñado para fijar el precio en la última oferta (la más cara), garantiza que las renovables vendan su energía al precio del gas, obteniendo márgenes descomunales. El Estado no solo lo permite, lo diseña. Porque el Estado no es el garante del bien común, sino el administrador de un mercado cuyas reglas han sido escritas por quienes se benefician de él.

La energía, como el agua, es un derecho reconvertido en mercancía. Y la pobreza energética no es un fallo del sistema, sino su característica esencial. Si no puedes pagar, no mereces calentarte ni cocinar.

4. Tu hogar, su activo.

En 2008 la burbuja inmobiliaria estalló. Los bancos fueron rescatados y muchos ciudadanos desahuciados. El Estado, que había garantizado el crédito hipotecario, no protegió a los deudores, sino a los acreedores. Cuando los bancos se quedaron con miles de viviendas vacías, en lugar de ponerlas a disposición del mercado social, las vendieron por lotes a fondos buitres como Blackstone, Cerberus o Lone Star, que hoy controlan decenas de miles de viviendas en España.

Como resultado, el alquiler se ha disparado, la compra es inalcanzable para los jóvenes y la vivienda se ha convertido en un activo financiero, en lugar de en un hogar.

Los centros históricos se "turistifican", los alquileres temporales expulsan a los vecinos de toda la vida y las periferias se convierten en dormitorios sin servicios y precarios. El derecho a la ciudad proclamado por Henri Lefebvre ha sido sustituido por el derecho a pagar el alquiler. Y si no puedes, te vas a la periferia o a la calle.

La deuda hipotecaria es el nuevo mecanismo de servidumbre. No se trata de un contrato entre iguales, sino de un dispositivo de sujeción que convierte al trabajador en un deudor perpetuo, atado a su empleo no por vocación, sino por la necesidad de pagar una cuota. El hogar, que debería ser el espacio de la intimidad y la seguridad, es hoy el lugar donde la precariedad se materializa en una letra que vence cada mes.

5. Movilidad como privilegio.

La privatización del transporte público es una de las más silenciosas y devastadoras. El AVE es rentable para el operador, pero caro para muchos potenciales usuarios. Los trenes de cercanías, deficitarios, sufren recortes constantes. La lógica es clara, si no da beneficios, no es viable.

Sin embargo, el transporte no es un negocio, era un derecho. Sin movilidad no hay acceso al trabajo, la educación o la sanidad. Y sin transporte público asequible, la libertad de desplazamiento se convierte en un privilegio de quien puede pagar un coche o un abono de alta velocidad.

El auge de las plataformas de movilidad, como Uber o Cabify, no ha resuelto el problema, lo ha agravado. Han sustituido el taxi regulado por un modelo de trabajadores sin derechos y algoritmos que fijan precios en función de la demanda y no del coste. La movilidad se ha convertido en un servicio de suscripción. Pagas por cada trayecto y el precio es variable, opaco y demasiadas veces abusivo.

La ciudad inteligente, ese espejismo de eficiencia, prometía fluidificar el tráfico pero en realidad ha terminado por segmentarlo. Los que pueden permitirse el coche privado, los que pueden pagar el Uber y los que quedan atrapados en autobuses masificados que llegan tarde. La movilidad, como el agua y la luz, se ha privatizado.

6. Saber para deber.

La universidad pública, que debía ser el principal motor de movilidad social, se ha convertido en una fábrica de titulados y algunos endeudados. La subida de las tasas universitarias no solo se ha convertido en una medida de ajuste económica, también en una barrera de entrada.

Y para quienes logran acceder, la deuda estudiantil, especialmente en los másteres y posgrados títulos propios, que no están regulados por precios públicos, se convierte en un lastre que condiciona su vida laboral.

La mercantilización del conocimiento ha seguido la misma trayectoria. La investigación se financia cada vez más con fondos privados que persiguen resultados rentables. La universidad, espacio de debate y creación de conocimiento público, ha asumido servir como departamento de I+D de las empresas. El saber, bien común por excelencia, se ha privatizado y, con ello, la promoción del conocimiento que puede venderse.

7. El cuerpo como mercado.

Si hay un ámbito donde la privatización resulta siniestra, es la sanidad. El derecho a la salud, consagrado en la Constitución, ha sido erosionado por la vía de los hechos: listas de espera, falta de personal, derivaciones a la sanidad privada y un discurso que repite que lo público es ineficiente y lo privado eficiente. La realidad es que las aseguradoras (Sanitas, Mapfre, Adeslas, Asisa, etc.) seleccionan a sus clientes y derivan los casos más complejos a la sanidad pública, que asume los costes sin recibir la financiación correspondiente.

El negocio farmacéutico es otro capítulo sangrante. Los medicamentos esenciales, muchos de los cuales son resultado de actividades financiadas con fondos públicos, son patentados y vendidos a precios exorbitantes. El cuerpo es un campo de extracción de valor: la enfermedad se convierte en un flujo de ingresos y la salud en un producto que se compra.

El sistema sanitario público, uno de los últimos reductos de lo común, está siendo desmantelado sistemáticamente con la complicidad de un discurso que repite, como un mantra, que lo privado es más eficiente.

8. La nueva propiedad privada.

La extracción de datos se ha hecho íntima. Cada vez que usamos un altavoz inteligente, una app de salud, un reloj que mide nuestro sueño o un navegador GPS, estamos generando datos biométricos, emocionales, espaciales y conductuales. Esos datos no son nuestros, son el petróleo de la economía digital.

Shoshana Zuboff lo llamó *el capitalismo de la vigilancia*. Ya no se trata de vender un producto, sino de predecir y modificar la conducta humana para obtener beneficios. Las empresas tecnológicas no son proveedoras de servicios, son extractoras de comportamiento. Y sus clientes no son los usuarios, sino los anunciantes, los fondos de inversión o los gobiernos que quieren controlar poblaciones.

La privatización de los datos es la privatización de la subjetividad. Lo que piensas, sientes, deseas o temes, todo es registrado, analizado y vendido. No hay espacio íntimo que no haya sido cercado por el algoritmo. Y lo peor es que lo aceptamos a cambio de pequeñas comodidades (una playlist personalizada, una ruta más rápida o un recordatorio para beber agua) sin entender que estamos entregando nuestra autonomía a cambio de utilidades efímeras. El dato, como el agua y la energía, se ha convertido en una mercancía y nosotros en la materia prima.

9. La calle en venta.

Queda un territorio por privatizar, la calle. El espacio público, que en la tradición mediterránea era el lugar del encuentro, la política y la fiesta, se ha convertido en un escenario de consumo. Los bancos de los parques llevan publicidad; las marquesinas de autobús, pantallas táctiles que recogen datos; y las plazas, zonas de restauración con terrazas de pago que expulsan a quien no consume. La peatonalización, que podría ser una conquista ciudadana, se ha transformado en una operación de marketing urbano: calles diseñadas para el paseo de turistas con capacidad de gasto, mientras los vecinos son empujados a las periferias.

El mobiliario urbano, como las farolas, bancos y papeleras, ya no es un servicio público, sino un soporte publicitario. Empresas como JCDecaux o Clear Channel instalan el mobiliario a cambio de la explotación publicitaria durante décadas. La ciudad se ha convertido en un centro comercial al aire libre, donde el ciudadano es, ante todo, un consumidor. El espacio público, que era el último vestigio de lo común, ha sido cercado también para explotarlo comercialmente.

La vigilancia y la mercantilización del espacio público van de la mano. Las cámaras no solo vigilan, también generan datos que se venden a empresas de seguros o a fondos de inversión inmobiliaria para calcular el valor de los barrios. La calle ya no es de todos, es un activo que cotiza.

10. ¿Queda algo que no se pueda privatizar?

Hemos recorrido el círculo: el agua, la energía, la vivienda, el transporte, la educación, la sanidad, los datos y el espacio público. No queda resquicio. Todo lo que constituye la vida cotidiana ha sido privatizado o está en proceso de serlo. El Estado, lejos de ser el garante del bien común, se ha convertido en el portero de este cercamiento. Legitima las concesiones, garantiza los contratos y reprime las resistencias.

La cuestión no es cómo revertir este proceso, aunque se trate de un asunto en el que deberíamos pensar, sino si hay algo que el capitalismo no pueda privatizar.

La respuesta provisional es que la "conciencia crítica y capacidad de imaginar otro mundo" es el único bien que todavía no puede ser suscrito ni cotizado.

Los movimientos de resistencia (cooperativas energéticas, okupación de viviendas de fondos buitres, software libre, monedas sociales, huertos urbanos, etc.), no son meras alternativas técnicas, sino pruebas de otras formas de vida. Ensayos frágiles, que a menudo fracasan, pero que demuestran que lo común también puede reconstruirse. No desde el Estado, que ya no es nuestro, sino desde la acción colectiva, desde la reapropiación de lo que nos fue arrebatado.

Este ensayo no termina con una solución, que no resulta fácil proponer. Tampoco acaba con un lamento. Finaliza con una pregunta, la misma que podríamos hacernos cada mañana al abrir el grifo, encender la luz y salir a la calle: ¿quiénes son los dueños de nuestras vidas?